

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISION LABORAL

| | |
|------------------|---|
| PROCESO | Ordinario |
| DEMANDANTE | Juan Manuel Gómez Buenaventura |
| DEMANDADO | AFP Porvenir - AFP Colfondos y COLPENSIONES |
| PROCEDENCIA | Juzgado 022 Laboral del Cto. de Medellín |
| RADICADO | 05001 3105 022 2019 00748 01 |
| INSTANCIA | SEGUNDA |
| PROVIDENCIA | SENTENCIA Nro. 013 de 2023 |
| TEMAS Y SUBTEMAS | Ineficacia de traslado |
| DECISIÓN | Adiciona y confirma condena |

Hoy, **diez (10) de febrero de dos mil veintitrés (2023)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas: María Eugenia Gómez Velásquez, Nancy Gutiérrez Salazar y Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento frente al recurso de apelación presentado por el apoderado de **Porvenir S.A.**, así como el grado jurisdiccional de **consulta** en favor de **Colpensiones**, ordenado en sentencia proferida por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por **Juan Manuel Gómez Buenaventura**, código de radicado único nacional 05001 3105 **022 2019 00748** 01.

Auto: atendiendo la documentación enviada vía correo electrónico, se procede a reconocerle personería a la Doctora Karen Sofía Sánchez González, para que continúe con la representación de Porvenir S.A.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de las restantes integrantes de la Sala el proyecto discutido y aprobado en acta N° **002**, que se adopta como sentencia y se plasma a continuación:

Antecedentes

Las pretensiones del demandante se orientan a obtener la declaratoria de nulidad y/o ineficacia, del traslado del RPM al RAIS, a través de la AFP Horizonte hoy Porvenir S.A., y con posterioridad a Colfondos S.A., *por vicios del consentimiento (engaño y error) y por haber incurrido las AFP en violación al deber objetivo de información*, disponiéndose que siempre ha estado afiliado al régimen de prima media con prestación definida, debiendo Colfondos retornar a Colpensiones los aportes de la cuenta de ahorro individual, junto con los rendimientos financieros, y esta última recibirlos. Pide también condena en costas.

En sustento de ello, afirma que **nació el 28 de junio de 1965, afiliándose al régimen de prima media con prestación definida en 1995**. Que en 1995 un asesor de Horizonte hoy Porvenir S.A., se acercó a su lugar de trabajo, y le manifestó insistentemente que se debía trasladar a dicho fondo al ser mucho mejor que el ISS, sumado a que esta entidad se iba a acabar, efectuándose la afiliación en agosto de 1997, cuando contaba con 101 semanas cotizadas al régimen de prima media, con movilidad a Colfondos en el 2007; que los fondos privados incumplieron con el deber de información según las directrices de la Superintendencia Financiera, debiendo considerarse que de haber continuado en el régimen de prima media con prestación definida, podría obtener la pensión, beneficio al que le informaron no podrá acceder en el régimen de ahorro individual; que solicitó, el 9 de julio de 2019, ante Colpensiones se aceptara su retorno.

Una vez subsanados los defectos advertidos por el Juzgado de conocimiento, en auto del **29 de enero de 2020**, se admitió y ordenó dar trámite a la acción. Debidamente notificadas, dentro del término para ello, las entidades vinculadas por pasiva allegaron escritos de contestación así:

Colpensiones, de los hechos son ciertos la fecha de nacimiento del demandante, la afiliación al régimen de prima media con prestación definida en 1995, la petición elevada a la entidad, aclarando que la misma se formuló fue el 17 de julio de 2019, emitiéndose respuesta el 22 del mismo mes y año. Los restantes hechos no le constan al estar relacionados con terceros ajenos a la entidad. **Resistió** las pretensiones, formulando **excepciones** tendientes a enervarlas, tales como: inexistencia de la ineficacia de la afiliación, inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP ante Colpensiones en casos de ineficacia de traslado de régimen, responsabilidad sui generis de las entidades de seguridad social, proporcionalidad y ponderación, equivalencia del ahorro o deferencia pensional, buena fe, la innominada, prescripción e imposibilidad de condena en costas.

Colfondos S.A., de los hechos admite solo lo referente a la fecha de nacimiento del actor, los demás supuestos o no son ciertos o no le constan, al estar relacionados con entidades diferentes. Con relación a la afiliación a dicho fondo afirmó que el actor se *"trasladó de manera libre y voluntaria en el año 2007" adicional a que se le entregó información objetiva "sobre el RAIS y su comparación con el RPM, entre ellos cálculos comparados que le permitían entender las condiciones pensionales que tenía al igual que información sobre las características, ventajas y desventajas del Régimen de Ahorro Individual con solidaridad decidiendo este tomar de manera libre y espontánea su decisión de cambio. En consecuencia, no es cierto que Colfondos o sus representantes comerciales hayan omitido información a la demandante antes de que firmara su afiliación."*

Resistió las pretensiones bajo el argumento que brindó una asesoría integral y completa respecto a todas las implicaciones de su decisión de traslado entre administradoras de pensiones, informándosele acerca de las características de dicho régimen, el funcionamiento, las diferencias entre el RAIS y el RPMPD, las ventajas y desventajas, el derecho de rentabilidad que produce, entre otros. Finalmente, presentó fundamentos de hecho y de derecho para soportar su contestación.

Porvenir S.A., esgrimió que los hechos no son ciertos y no le constan. Aduce que el demandante suscribió formulario de afiliación a Colpatria hoy Porvenir S.A., el 23 de abril de 1997, haciéndose efectiva el 1 de junio de la misma anualidad, advirtiendo que tuvo otros traslados horizontales a dicha entidad y a Horizonte, según se evidencia en el SIAF. Afirma, que la vinculación del actor se dio en cumplimiento de las obligaciones legales vigentes para la época. **Mostró oposición a las pretensiones y formuló las excepciones** de prescripción, cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación y, buena fe.

La primera instancia culminó con **sentencia**, proferida por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito el **29 de noviembre de 2022**, declarando la ineficacia del traslado que hizo Juan Manuel Gómez Buenaventura desde el RPMPDD al RAIS a través de la AFP Colpatria hoy Porvenir S.A., con posterioridad a Porvenir S.A., luego Horizontes S.A., hoy Porvenir S.A., y finalmente a Colfondos S.A., teniéndose su vinculación sin solución de continuidad al régimen de prima media con prestación definida. Condenó a Colfondos a trasladar a Colpensiones dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la sentencia, todos los dineros depositados en la cuenta de ahorro individual, incluyendo los aportes y rendimientos, y de su propio peculio y debidamente indexados, los valores destinados a gastos de administración tal y como lo dispone el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, sumas estas últimas, que también debe retornar Porvenir S.A. en los mismos términos. Declaró no probadas las excepciones propuestas e impuso costas a cargo de Porvenir S.A., y Colfondos S.A., fijando el monto de las agencias en derecho.

Argumentó el juez, después de citar amplia jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral frente al tema de la ineficacia, que los fondos demandados no probaron que le hubiesen suministrado al actor una información debida, tal y como lo afirmaron en

las contestaciones de la demanda, esto es, no se le brindó una asesoría sobre las características y diferencias, las consecuencias que le acarrearía su decisión, tales como la negociación anticipada del bono pensional, los requisitos que debía cumplir para pensionarse de manera anticipada, la forma en que su grupo familiar, la edad de estos y la expectativa de vida, podía afectar el reconocimiento y pago de la pensión, sin que la sola suscripción del formulario, aunque autorizado por la Superintendencia, demuestre el cabal deber de información, adicional a que la actuación no se convalida por los traslados efectuados entre diferentes administradoras, disponiendo la ineficacia del traslado, con las restituciones antes mencionadas.

Inconforme con la anterior decisión, **Porvenir S.A., interpuso recurso de apelación;** afirma que cumplió con el deber de información vigente para la fecha del traslado, lo cual, se puede corroborar con lo dicho en el interrogatorio de parte, sin que se pueda desconocer que para la data en que se produjo no existía la obligación de dejar constancia por escrito de la asesoría, así como tampoco de dar un buen consejo, pues, el mismo solo implementó a partir del 2010 y 2014, y la doble asesoría, con la expedición de la circular 016 de 2016, de la Superintendencia Financiera. Manifiesta que la entidad cuenta con personal debidamente preparado para realizar el acompañamiento y asesoría de los afiliados, sin que se encuentre en una mejor ventaja probatoria para acreditar lo pedido en la demanda.

Pide de igual forma, la revocatoria de la orden de traslado de gastos de administración al ser dineros que no se encuentran en su patrimonio, a más que cumplieron con el propósito para el cual fueron destinados, esto es, generar frutos y rendimientos en la cuenta de ahorro individual del afiliado, siendo, incluso, superiores a los que se hubiesen dado en el régimen de prima media con prestación definida.

Finalmente, insta para que no se imponga condena en costas, al haber actuado de buena fe y bajo la normativa imperante para la época en que el demandante se trasladó.

De la oportunidad para presentar alegaciones hizo uso **Porvenir S.A.**, quien luego de transcribir la parte resolutive de la sentencia solicita se revoque la sentencia en cuanto declaro la ineficacia de la afiliación y la condena al reintegro de las cotizaciones rendimientos, las cuotas de administración debidamente indexadas, primas de seguros previsionales. Frente al primer puto, esgrime se cumplió con el deber de información establecido para la época en el artículo 97 del Decreto 663 de 1993, esto es, se le entregó la información necesaria y obligatoria para época dentro del mismo funcionario, el cual fue revisado y aprobado por la Superintendencia Financiera, adicional a que la parte contó con varias oportunidades para retornar al régimen de prima media y no lo hizo, y que la motivación para estar inmerso en el régimen de prima media con prestación definida es la diferencia en la mesada, supuesto que no da lugar a declarar la ineficacia. Esgrime que la obligación de buen consejo, doble asesoría, e incluso desincentivar la afiliación, es posterior a la fecha en que se dio la afiliación, sumado a que se advierte un incumplimiento por parte del demandante del deber de diligencia y cuidado de sus propios negocios, lo cual conlleva a que el mismo no pueda ser beneficiario de su propia culpa o negligencia, y que la ignorancia de la Ley o el desconocimiento de esta no sirve de excusa, tal y como lo establece el artículo 9 del C.C.

En caso de dejarse en firme la ineficacia, insta para que se revoque la condena a devolver los gastos de administración, al ser un concepto que tiene una destinación específica tal y como lo dispone el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, cumpliendo estos el propósito para el cual fueron creados, esto es, la generación de rendimientos lo que se ven reflejados en la cuenta de ahorro individual del afiliado, a más que se encuentran

protegidas las contingencias de invalidez y sobrevivencia. Retornar dicha suma daría lugar a un enriquecimiento sin justa causa, ante el incumplimiento de las normas legales que regulan las restituciones mutuas derivadas de una ineficacia o nulidad.

Finalmente, aduce que su actuar siempre ha estado precedido de buena fe objetiva, en cumplimiento de las disposiciones legales vigente para la época en que se dio el traslado y buscando siempre el beneficio de la parte, por tal, se debe absolver del pago de las costas.

Colpensiones, afirma que, al encontrarse el demandante a menos de 10 años de pensionarse, no es posible acceder al traslado solicitado, sumado a que no se encuentra inmerso en las causales establecidas por la Corte Constitucional para disponer el mismo, no obstante, de confirmarse la sentencia de instancia, pide se ordene la devolución de las cotizaciones, rendimientos financieros, cuotas de administración debidamente indexadas, al servir dichos rubros para capitalizar el fondo, el cual, es de naturaleza común

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones:

De acuerdo con el recuento realizado, los argumentos de la apelación y **el grado jurisdiccional de consulta para Colpensiones, el problema jurídico** en esta instancia se circunscribe a establecer, si hay lugar a la declaratoria de ineficacia de la afiliación del demandante al RAIS inicialmente a través de la AFP Colpatria hoy Porvenir, y de las movilidades dentro del mismo régimen, y como consecuencia de ello, si procede su inmersión automática en el RPM administrado por Colpensiones, con las

correspondientes restituciones económicas, los conceptos que estas comprenden. Finalmente se analizará la condena en costas a Porvenir S.A.

Pues bien. Reiterada ha sido la línea de la jurisprudencia **mayoritaria** de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2008, en torno al tema de la carencia de efectos jurídicos del traslado de régimen pensional cuando no está precedido de una suficiente, completa, clara, comprensible y oportuna información sobre las reales implicaciones de abandonar el régimen de prima media con prestación definida y sus posibles consecuencias futuras, existiendo unas reglas decantadas, entre ellas que la movilidad entre regímenes debe estar precedida de la debida información y transparencia, **para el caso concreto, el traslado se efectuó el 23 de abril de 1997**, se estaba en el primer estadio de la regulación normativa, contenida entre otras en los arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, art. 97, numeral 1º del Decreto 663 de 1993, disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal, y por tanto el contenido mínimo estaba circunscrito a la **ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales**, lo que supone el análisis de la situación particular de cada afiliado ante el sistema, **confesándose por la AFP Porvenir en el escrito de contestación, contrario a lo que afirma en su defensa, y en lo que insiste al sustentar la alzada, que no le consta la edad, la vinculación al régimen de prima media, a pesar de obrar dentro de los anexos de la misma contestación, certificación de Ssofondos donde se evidencia que el actor estaba en Colpensiones, marcándose en el formulario con el que pretende acreditar la completa ilustración, casilla vinculación traslado de régimen**, luego no es posible inferir pa el cumplimiento del deber de información bajo las reglas de la normatividad

vigente, primer estadio como ya se explicó, pues del pronunciamiento frente a los hechos lo que se aprecia es **absoluto desinterés y desdén por la suerte del derecho pensional del aquí demandante.**

Sobre el deber de información en cabeza de las administradoras de pensiones, pertinente resulta para el caso traer a colación lo explicado en sentencia SL2484-2022, con fecha 24 de mayo de 2022, en asunto de idéntica naturaleza en que también fue demandada la AFP Porvenir S.A.:

(i) Del deber de información de las administradoras de pensiones

Esta Corporación ha considerado que, desde la implementación del sistema integral de seguridad social en pensiones, que incluyó la creación de las administradoras de pensiones, se estableció a cargo de estas el deber de ilustrar a sus potenciales afiliados, en forma clara, precisa y oportuna, acerca de las características de los dos regímenes pensionales a fin que pudieran tomar decisiones informadas (CSJ SL1452-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ 2611-2020 y CSJ SL1062-2021).

Lo anterior, toda vez que el Decreto 663 de 1993, «Estatuto Orgánico del Sistema Financiero», prescribió en el numeral 1.º del artículo 97 la obligación de las mismas de «suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado», y la Ley 795 de 2003, «Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones», reiteró en su artículo 21 este deber, en el sentido que tal información tiene como propósito evaluar las mejores opciones del mercado y «poder tomar decisiones informadas».

La Sala también ha considerado que con el transcurrir del tiempo, el deber de información ha evolucionado a un mayor nivel de exigencia, y ha identificado tres etapas, conforme el avance normativo que regula el tema, así: el primero desde 1993 hasta 2009, el segundo desde 2009 hasta 2014 y, el último, de 2014 en adelante.

Entonces, de acuerdo a la fecha en la que el actora migró al régimen de ahorro individual con solidaridad –1.º de septiembre de 1999–, la obligación de la AFP se enmarcaba en el primer periodo; esto es, cuando debía brindar información clara y transparente acerca de los dos regímenes pensionales.

En consecuencia, el acto jurídico de traslado de régimen debió estar precedido de una ilustración, como mínimo, acerca de las características, condiciones, acceso, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de los riesgos y consecuencias

de su cambio y, por tanto, las AFP tenían a su cargo el verdadero e ineludible deber de obtener un consentimiento informado (CSJ SL19447-2017), entendido como el procedimiento que garantiza, antes de aceptar un ofrecimiento o servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen. Vale decir que el afiliado, antes de dar su consentimiento, debe recibir información clara, cierta, comprensible y oportuna. Negrillas intencionales.

Estando, contrario a lo expuesto en el recurso de alzada, la carga de la prueba en cabeza de las administradoras, sin que sea requisito para su cumplimiento que el afiliado goce del beneficio de la transición o tenga un derecho pensional consolidado, ni se infiera de los formularios suscritos, siendo la consecuencia de la inobservancia de tal deber, en cabeza de las administradoras, desde la entrada en vigencia del sistema pensional, artículo 97 Dto. 663 de 1993, **la ineficacia del acto de traslado de régimen en los términos de los artículos 13 literal b) y 271 de la Ley 100 de 1993**, norma que a la letra, para lo que interesa, indica: ***la afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador, precepto a partir del cual se ha desarrollado la línea vigente en la jurisprudencia especializada, que esta Sala acoge como precedente vertical***, pues se carece de razones para argumentar en contrario, como se pretende por el apoderado de Porvenir S.A., y siendo su consecuencia, para casos como el que se somete a estudio, que las cosas se retrotraigan al estado anterior, con la devolución de la totalidad de los aportes efectuados por el afiliado, con los rendimientos y deducciones, resultando innecesaria una extensa citación sobre el particular, y menos relacionar por radicación la gran cantidad de decisiones hasta la data actual proferidas por la Sala de Casación Laboral, bastando, para el caso, referir el contenido de la sentencia **SL843-2022**, radicación 85499, con fecha **16 de marzo de 2022**, en la que se explica en forma amplia lo dicho.

De acuerdo con ello, y por ser el precedente vigente en el órgano de cierre de esta especialidad, es el acogido por esta Sala de Decisión, advirtiéndose que en lo atinente a los rubros a devolver una vez declarada la ineficacia del acto de traslado, su actualización mediante el mecanismo de la indexación, y la obligación de las AFP de asumir lo descontado por gastos de administración, seguros previsionales y garantía de pensión mínima con su propio patrimonio, surgen, entre otras, a partir de las sentencias **SL3202-2021, SL3706, SL3707, SL3708, SL3710, SL3349-2021, SL4803-2021, SL4609-2021** reiteradas, entre otras en las **SL755-2022, SL756-2022, SL843-2022, SL1019-2022 y SL1055-2022**, sin que pueda afirmarse que con esto se emite una doble condena o que exista la posibilidad de compensar suma alguna con los rendimientos, pues, fue la actuación de la AFP la que dio lugar a la ineficacia del acto, debiendo Colpensiones, con ocasión de tal sanción, responder por las prestaciones que correspondan dentro del sistema, al no haber tenido ningún efecto la pertenencia al régimen de ahorro individual, y disponerse la restitución integral de aportes, decisión que, por demás, no se torna caprichosa, dado que, **como ya se advirtió acata el precedente vertical reiterado en más de 3 decisiones que constituyen doctrina probable.**

Por lo que se **confirma** la sentencia revisada en cuanto ordenó a la AFP Porvenir S.A. a restituir con su propio peculio las sumas descontadas durante el tiempo de afiliación del actor, por concepto de gastos de administración, primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados, y a Colfondos de la misma forma, estos rubros, más los aportes, rendimientos financieros y demás conceptos que se encuentren en la cuenta de ahorro individual.

Se complementa la sentencia para ordenarle a las AFP que, al momento de cumplir la orden impartida en cuanto a restituciones, deberán remitir a Colpensiones relación discriminada de los conceptos, con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

Los rubros antes mencionados no se encuentran afectados por el fenómeno extintivo de la prescripción, pues pese a que los mismos no están ligados al reconocimiento del a prestación, si están íntimamente relacionados con la declaratoria de ineficacia, la cual según criterios ya expuestos de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral no prescribe, sumado a que solo en el trámite del proceso es que fue declarada.

No se está en este caso autorizando un traslado de régimen desatendiendo la restricción temporal del artículo 2º de la Ley 797 de 2003 que modificó el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, *después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez*, sino imponiendo la sanción de ineficacia por no haberse dado una libertad informada en la elección de régimen pensional al momento del traslado, en los términos del literal b) de la misma norma, en concordancia con el artículo 271 del mismo estatuto, decisión con la que en manera alguna se atenta contra la sostenibilidad financiera del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, pues con el traslado integro de recursos se garantiza la equivalencia de condiciones en aportes en el evento de haberse mantenido la vinculación, máxime cuando si bien es cierto esta es una regla introducida por el Acto Legislativo 01 de 2005 que modificó el 48 de la Constitución Política, debe tenerse en cuenta el Acto Legislativo 03 de 2011, artículo 1º, que modificó el artículo 334 superior relativo al régimen de Hacienda Pública, que en su **parágrafo** reza: ***al interpretar el presente artículo, bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza***

administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su efectiva protección.

Y con relación a la no imposición de costas, baste decir que las mismas son una simple consecuencia procesal del ejercicio de la acción o de la excepción, que se traduce en una obligación que se dirige contra el patrimonio de la parte vencida, que otorga a favor del vencedor un derecho de reintegro de los gastos procesales en los que se ha visto obligado a incurrir (auto Sala de Casación laboral Corte Suprema del 24 de enero de 2007, radicado 31.155, reiterado en sentencia SL 5141-2019), sin que sea dable entrar a analizar la buena o mala fe de la entidad en el transcurso del proceso, por lo que se mantienen las de primera instancia.

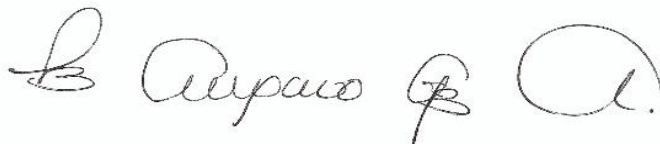
Costas en esta instancia a cargo de Porvenir S.A., a quien se desata adversamente el recurso interpuesto (art. 365-1 del C. G. del P.), las agencias en derecho se fijan en la suma de **\$1.160.000,00** y en favor de la parte actora.

En mérito de lo expuesto, **la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **adiciona** la sentencia proferida por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por **Juan Manuel Gómez Buenaventura**, en contra de la **AFP Porvenir S.A., Colfondos S.A. y Colpensiones**, **para indicar** que al momento de cumplirse la orden impartida a Porvenir S.A., y Colfondos S.A., en cuanto a las restituciones a efectuar, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen. **En lo demás confirma.**

Costas en esta instancia a cargo de Porvenir S.A., las agencias en derecho se fijan en la suma de **\$1.160.000,00** y en favor de la parte actora.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO**, que se fijara por **secretaría por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

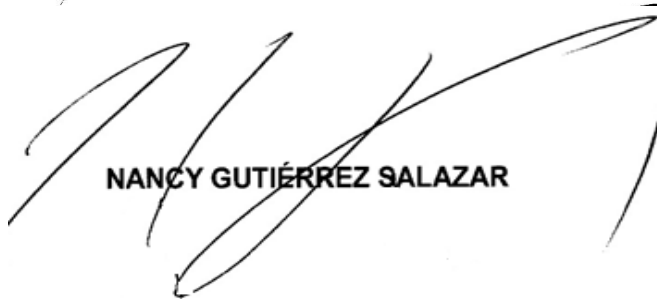
Las magistradas (firmas escaneadas)



LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR